

Venezuela. ¿Sentencia del desastre?

Thais Maingon

En los trágicos sucesos de abril de 2002 confluyeron una serie de desarrollos paralelos y paulatinamente concentrados. A la falta de resultados económicos y sociales luego de tres años de gobierno, la paulatina degradación política del oficialismo, del que no fue ajeno un persistente estilo de confrontación, y la ausencia de pericia y transparencia administrativa para llevar adelante el Estado, se agregó en los últimos tiempos una crisis de legitimidad derivada del lento éxodo de los apoyos del presidente Chávez, que en su momento de apogeo habían sido social y políticamente plurales. Ahora está abierto un curso de final incierto, aunque poco a poco va adquiriendo mayor consenso la idea de un cambio vía consultiva o legislativa. Mientras tanto, los militares se han convertido en protagonistas cada vez más decisivos del actual proceso.

Se piensa que Venezuela vive, desde 1999, en democracia. Desde el punto de vista formal no cabe la menor duda. El presidente y demás representantes de los poderes públicos (legislativo, regional y local) son producto de elecciones libres. Sin embargo, cuando se conocen

y revisan detenidamente las prácticas y esencia democráticas, puede advertirse con facilidad que en Venezuela esta forma de gobierno no ha logrado un fuerte arraigo. Desde 1958 hasta 1988 se sucedieron siete procesos electorales, que respetaron los acuerdos producto del

Thais Maingon: socióloga venezolana; profesora-investigadora del Área de Desarrollo Sociopolítico del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela - Cendes; coordinadora del Posgrado en Planificación del Desarrollo, mención Políticas Sociales.

Palabras clave: situación política, procesos políticos, crisis y conflictos, Venezuela.

Pacto de Punto Fijo¹ y mostraron baja abstención –la más alta del periodo alcanzó 18%, en los comicios de 1988. De ahí en adelante, el abstencionismo ha lucido una clara tendencia al aumento.

Las elecciones de 1993 tuvieron como antecedentes inmediatos y presentes en el imaginario colectivo la rebelión social como respuesta a la pérdida de la «gran Venezuela», que culminó con el Caracazo (27 de febrero de 1989) y los levantamientos militares (4 de febrero y 27 de noviembre de 1992). Estos sucesos expresaban el generalizado malestar social, político y económico, siendo el preámbulo hacia la construcción de un clima de conflictividad social y política permanente. Fueron hechos que ratificaron la fragilidad de una cultura política tendiente a la democracia y a su profundización y que revelaron, por el contrario, una propensión general hacia el autoritarismo con ciertas raíces mesiánicas, creencias lejanas a la confianza en un Estado de derecho.

En las elecciones de 1998 resultó electo por primera vez un candidato presidencial proveniente de la fuerza armada, el teniente coronel (r) Hugo Chávez Frías, uno de los cabecillas de la asonada militar del 4-F, con 56% de los votos y una abstención de 37%. Posteriormente, dando cumplimiento a lo pautado por la Constitución de 1999, en 2000 se

relegitimaron los poderes públicos. En esta última elección compitieron por la presidencia tres candidatos, dos de ellos militares retirados, obteniendo Chávez nuevamente el triunfo con 60% de los votos válidos y una abstención cercana a 44%, lo que puso en evidencia el agotamiento del rito democrático y el aumento de la *protesta silenciosa* que marcó el camino hacia la involución del sistema democrático venezolano. Con ello se revelaba la precariedad de la cultura política democrática en Venezuela y la creciente deslegitimación del sistema democrático representativo, creándose así el marco político apropiado para la desobediencia civil.

Entre 1999 y 2002 asistimos a la presencia activa, cada vez más numerosa, de militares en el Gobierno, ejerciendo cargos públicos (como ministros, gobernadores, alcaldes, directores de organismos y hasta la presidencia de la mayor empresa del país –Petróleos de Venezuela– Pdvs). También se hizo habitual el continuo trato, por parte de Chávez, a la Fuerza Armada Nacional (FAN) como si fuera un partido político gubernamental

1. Pacto político firmado por los principales partidos y otras fuerzas –militares, Iglesia, organización del capital– en torno del respeto de los resultados de las elecciones presidenciales de diciembre de 1958 y la forma de gobierno posterior. Luego se sumó el acuerdo obrero-patronal, y posteriormente funcionaron numerosos mecanismos de entendimiento y «concertación».

dispuesto a defender con las armas la llamada «revolución bolivariana», así como fueron usuales las repetidas y largas cadenas nacionales de radio y televisión de Chávez con su lenguaje retador, polémico y descalificatorio de quien se manifestara en desacuerdo con sus propuestas o decisiones, tildándolo de enemigo del proceso. En los últimos tiempos, la crítica y hasta la oposición pública de varios militares de alto rango, tildando al régimen chavista de antidemocrático y violatorio de la Constitución, reveló una FAN fracturada, profundamente dividida y con un dificultoso control por parte del Ejecutivo. Otros elementos que expresaron la degradación política y evidenciaron otras dificultades para el Gobierno fueron sus peligrosas relaciones con la guerrilla colombiana; las constantes diatribas presidenciales contra los medios de comunicación, la Iglesia, los empresarios; la insistencia en no reconocer las elecciones sindicales de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), que ganó la oposición; y por último, el anuncio presidencial de relanzar el MBR-200² y de dar un segundo aire a la conformación de los llamados círculos bolivarianos (CB)³, grupos de choque armados y organizados desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, con el fin de defender el proceso y cuyo responsable era el ministro de la Secretaría.

Es difícil analizar coherentemente la situación actual, salvo a grandes rasgos, desde sus orígenes, pues es claro que no existió por parte del Gobierno y del chavismo un plan premeditado para estructurar lo que reiteradamente se llama desde el oficialismo «la revolución bolivariana». Esta fue surgiendo a medida que iban ocurriendo los acontecimientos y sobre la marcha, por lo que la arbitrariedad e improvisación gubernamentales son las constantes. Conviene recordar las expresiones de sorpresa de los ministros asistentes a las cadenas nacionales, cuando Chávez anunciaba de manera espontánea proyectos que no eran del conocimiento de los funcionarios involucrados o responsables.

Asistimos con asombro a la reproducción de prácticas clientelares, corrupción e ineficiencia en todos los ámbitos de la vida nacional, ante la mirada indiferente de las autoridades, y a la progresiva confusión de las nociones de Estado

2. MBR son las siglas del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, grupo militar que constituyó el núcleo de los intentos de golpe de Estado de 1992.

3. Cuando el Gobierno inició la conformación de los CB, se dijo que éstos tendrían funciones de promoción política y social comunitaria, pero la desviación del régimen ha hecho que estos grupos se hayan estructurado como grupos armados de choque que tienen como función la defensa a ultranza del régimen y así son percibidos por el resto de la población. Según un documento de la FAN, para mayo de 2002, estos CB alcanzan la cifra de 7.362.

y Gobierno, y la personalización, con aires de megalomanía, del Estado en el gobernante (expresiones como la «la ley soy yo» y «el Estado soy yo» pueden ser escuchadas con frecuencia en las cadenas nacionales. Sin embargo, el resentimiento social que ha venido aflorando desde el triunfo electoral de Chávez no fue creado por éste; arranca desde la constitución misma de la democracia en 1958, mediante la exclusión de grupos políticos de izquierda que no entraron en el pacto político-social de entonces pero, por sobre todo, es producto de la pésima administración de los anteriores gobiernos –de lo que hoy el oficialismo llama las «cúpulas podridas»– que se caracterizaron por la clientelización de las estructuras gubernamentales, la corrupción de la gestión pública, la represión contra los disidentes peligrosos y, en consecuencia, la creciente ineficiencia del Estado. Elementos que, con una estructura distributiva tan regresiva como la venezolana, contribuyeron a la profundización de las desigualdades socioeconómicas entre la población y prepararon el terreno para la creencia en el mesianismo chavista.

Pero el hecho de que se prolongara deliberadamente esa situación, de que no se ofrecieran soluciones concretas a la pobreza y al desempleo, en un contexto de precios petroleros en ascenso o por lo menos

favorablemente fluctuantes, es consecuencia directa de la pretendida transformación social de la «revolución bolivariana». Mientras los ideólogos del Gobierno han creído al parecer en que la «profundización de las contradicciones» sería el motor de los cambios sociales, los funcionarios dispusieron a discreción de los recursos del erario público porque, de una a otra forma se trata, según ellos, de la lucha de pobres contra ricos, tema que afloró en repetidas oportunidades en los discursos chavistas. Quizá la tendencia hacia el autoritarismo y el mesianismo como salidas a la crisis puedan entenderse como el reclamo por una justicia social inexistente en las políticas públicas y especialmente, en las políticas sociales del Estado. Esa sería una esperanza, o un buen deseo, más que una hipótesis sustentable.

En la ruta del 11 de abril

En noviembre de 2001 fue aprobado por la Asamblea Nacional, con gran celeridad y merced a los votos de la mayoría oficialista, un conjunto de leyes inscritas en la segunda habilitación otorgada al Ejecutivo. La reacción a este paquete legislativo no se hizo esperar. Se produjeron numerosas manifestaciones de repudio de la sociedad civil organizada, principalmente de la máxima federación empresarial (Fedecámaras) y de algunas de sus

cámaras. Especialmente, la Ley de Pesca y Tierras fue percibida como atentatoria contra la propiedad privada y con un fuerte carácter confiscatorio por parte del Estado. La Ley de Hidrocarburos tuvo fuertes críticas por parte, entre otros, del presidente de Pdvsa, que marcó distancia respecto de las políticas del Gobierno, en especial la económica. Se le criticaba a este paquete no haber contado por la participación y consulta suficientes de los sectores interesados e involucrados, lo que atentaba contra lo establecido en la Constitución: el derecho a ser consultado y a participar en las cuestiones nacionales consideradas importantes para todos los miembros de la sociedad.

Desde entonces se presentó un clima de oposición al Gobierno, siendo Chávez el centro de los ataques y creándose un ambiente de ingobernabilidad rodeado de continuas manifestaciones callejeras, rumores de golpe y paros convocados por numerosos gremios. Por el otro lado estaban las manifestaciones de apoyo a Chávez, al Gobierno y al paquete de leyes recién promulgado. Las razones que agrupaban a la oposición iban desde solicitar la rectificación del Gobierno, o sea la apertura a la consulta y al diálogo, hasta su renuncia. Se plantearon –y se siguen planteando– diferentes posibilidades, la mayoría respetando el marco institucional

para la salida del presidente (referéndum consultivo, revocatorio del mandato, recorte del periodo presidencial vía enmienda constitucional, renuncia).

Desde los medios de comunicación se magnificaron las protestas, creando un peligroso clima de conflictividad propicio para un enfrentamiento entre la oposición y los partidarios oficialistas. Ante la negativa al diálogo por el Ejecutivo, y llegando al límite de la tolerancia, esta confrontación tuvo como efecto contundente la convocatoria de Fedecámaras a un paro cívico para el 10 de diciembre de 2001, siendo vocero su presidente, Pedro Carmona. A este paro, que resultó exitoso, se le sumaron varias organizaciones de la sociedad civil, así como la CTV. Esta situación fue preámbulo de la marcha convocada para el 23 de enero de 2002, fecha que tradicionalmente (hasta 1999) se venía celebrando como día de nacimiento de la democracia en Venezuela. Al igual que el paro del 10 de diciembre, esta marcha contó con el apoyo de la CTV, Fedecámaras y un amplio espectro de organizaciones que incluyó a representaciones de los partidos políticos tradicionales –aunque se tuvo cuidado de que éstos aparecieran sin roles protagónicos. En esta marcha se refrendaron los objetivos del primer paro cívico, el clamor por libertad y democracia

fueron sus principales motivaciones. La concurrencia a este evento resultó mayor que la esperada. Por su parte, el oficialismo también organizó para ese mismo día una manifestación que al lado de la marcha opositora resultó exigua. Ello preocupó al Gobierno, interrumpiendo numerosas veces con cadenas nacionales las transmisiones de radio y TV sobre los acontecimientos. Desde este momento, cada marcha convocada opositora tendría su contramarcha convocada oficialista, espacialmente separadas y con los guardianes del orden público haciendo lo imposible para que no se produjera un encuentro. Ya desde antes habían sido violentamente atacados, por los CB, las sedes de varios periódicos y estaciones de TV, a lo que reaccionó la comunidad internacional advirtiendo los peligros contra la libertad de expresión y de información. A su vez, en los hogares de las principales ciudades las cadenas nacionales eran recibidas con cacerolazos. Es importante destacar que la ciudad de Caracas está emplazada en un valle con sentido oeste-este; la oposición se concentra en el este, y el oeste, por estar más cerca del Palacio de Gobierno, es ocupado por el oficialismo. Hasta la multitudinaria manifestación del 11 de abril de 2002, nunca antes las marchas y actos de protesta (oficialismo y oposición) se habían encontrado.

Como consecuencia de su desacuerdo con la nueva Ley de Hidrocarburos y los lineamientos de la política económica del Gobierno, el presidente de Pdvsa, general Guaicaipuro Lameda, presenta su renuncia y solicita el pase a retiro. A finales de febrero Chávez nombra –en potestad de hacerlo– una nueva junta directiva pasando por alto la tradición de los ascensos en la corporación, que hasta entonces había sido respetada. La nueva junta fue criticada por carecer de conocimiento y experiencia, tanto gerencial como operativa. Rápidamente se advirtió que el objetivo gubernamental era tener un control absoluto del funcionamiento y de los frutos de la empresa petrolera, una de las más poderosas del continente. Ello produjo, de parte de la alta gerencia y de los directivos de la nómina mayor, una reacción de rechazo y desobediencia a la junta directiva recién nombrada. Se revelaron dos concepciones contrapuestas sobre el funcionamiento de Pdvsa: de un lado, la que sostiene que debe funcionar como un negocio, imponiendo el orden de lo técnico corporativo sobre lo político; por otro lado, la perspectiva según la cual la empresa debería ser parte integral de las decisiones gubernamentales –lo que restaría autonomía e importancia a una política de profesionalización de recursos humanos.

Los altos gerentes de Pdvsa lograron aglutinar apoyos cada vez mayores, dentro y fuera de la corporación (hubo concentraciones diarias frente a las sedes en Caracas, siendo en una de ellas permanente). El conflicto llegó a su límite cuando se amenazó con paralizar la industria, cerrando toda posibilidad de negociar la recomposición de la junta directiva. La CTV convocó a un paro general, inicialmente de 24 horas, para el 9 de abril con el fin de presionar al Gobierno a que reconociera la legitimidad de la representación sindical e iniciar el proceso de contratación colectiva paralizado desde el año pasado. A este llamado se le sumó Fedecámaras, vastos sectores de la sociedad y la nómina de Pdvsa aún en conflicto abierto con el Ejecutivo. Es así como en su habitual programa de los domingos *Aló Presidente*, que se transmite por el canal de TV y la emisora de radio del Estado, del 7 de abril, Chávez despidió de sus cargos, en forma grosera y burlona y ante las carcajadas de quienes lo acompañaban en ese momento, a varios de los gerentes «desobedientes» de Pdvsa.

El éxito del paro del 9 de abril fue relativo, no se logró paralizar al transporte y muchos comercios permanecieron abiertos. Sin embargo, los responsables de la convocatoria decidieron prolongarlo por otras 24 horas, con indicios de

convertirse en huelga general, y el 11 de abril se declaró paro indefinido mientras comenzaban a percibirse los resultados de la paralización petrolera. Para ese mismo día se convocó a una marcha hasta una de las sedes de Pdvsa, resultó multitudinaria (se calcularon alrededor de 700.000 personas). El gran éxito de esta manifestación pacífica hizo que se atendieran los llamados a que continuase hacia el Palacio de Miraflores a solicitarle la renuncia a Chávez y su sustitución por un gobierno de transición. Mientras tanto, el oficialismo hizo un llamado a los CB para que salieran a la calle armados de palos, botellas y piedras con el fin de defender el proceso.

Mientras la marcha se acercaba a Miraflores, en horas de la tarde Chávez, a través de una cadena nacional, obliga a los canales privados de televisión y emisoras de radio a salir del aire. Pero las televisoras, desobedeciendo las normas de tal mandato dividen sus pantallas, de un lado se veía y escuchaba a Chávez y del otro se mostraban imágenes de represión contra la marcha opositora. Después se supo también que hubo francotiradores apostados en los techos de los edificios cercanos al Palacio de Gobierno y en puentes aledaños, creando un clima de confusión y de terror. Hasta hoy no se sabe la cifra exacta de víctimas

(se presume entre 20 y 25 muertos, y 200 heridos). En este punto, voceros de la FAN declararon no estar dispuestos a atacar con las armas al pueblo, desobedeciendo así la orden que supuestamente había dado el presidente de detener la multitud. Ante la incapacidad gubernamental de evitar la masacre, se produce la renuncia de varios miembros del Alto Mando militar. Se informa que Chávez se encuentra detenido por un grupo de generales y que se negociaría su renuncia. En la madrugada del 12 de abril el entonces inspector de la FAN (general Lucas Rincón) anuncia que Chávez ha renunciado e inmediatamente el Alto Mando pone sus cargos a la orden del que sería la cabeza del próximo gobierno de transición: Pedro Carmona, quien ante el vacío de poder en que se encontraba el país habría sido designado para ejercer la presidencia por el grupo de generales que estaban llevando adelante el proceso.

Posteriormente, se inició una serie de detenciones a funcionarios del gobierno depuesto violando las formas establecidas por la Constitución. A finales de la tarde del día 12, Carmona se autoproclama presidente de facto ante una congregación de empresarios, representantes de la Iglesia y un grupo de militares. Su primer decreto interrumpe el hilo constitucional (disolución de la

Asamblea Nacional, sustitución de las autoridades regionales y locales, destitución de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Ciudadano), establece diciembre como fecha para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional y abril de 2003 para los demás poderes públicos. Este decreto fue rápidamente rectificado por el propio Carmona al día siguiente, restituyendo en sus funciones a los miembros de todos los poderes electos, así como también reconociendo la legitimidad del TSJ y del Poder Ciudadano.

Una vez detenido, Chávez había sido trasladado a Turiamo (estado Aragua) y luego a la isla de La Orchila. Mientras tanto, las protestas callejeras de los seguidores de Chávez iban en aumento en diferentes partes de la ciudad, pero principalmente frente al Palacio de Gobierno, reclamando la restitución del presidente. A la vez, los militares leales lograron controlar la mayoría de los comandos y en la noche del 13 de abril se produce la renuncia de Carmona, hasta que luego de negociaciones aún secretas entre militares leales y críticos al gobierno de Chávez, pero por sobre todo institucionalistas, y tratando de no cortar el hilo constitucional, permiten el regreso de Chávez en la madrugada del 14 de abril, ante la presencia de una masiva concentración a la entrada de Miraflores.

Entre el sábado 13 y el domingo 14 se producen en varias ciudades manifestaciones públicas, disturbios callejeros y salvajes saqueos que no fueron reprimidos por órgano policial alguno; ello junto con el acuerdo tácito de las televisoras privadas de no transmitir información alguna sobre lo que estaba ocurriendo en las calles. A1 mismo tiempo resultó parcializada, y quizá punible la actuación de los representantes del Poder Ciudadano; en este sentido fue especialmente notoria la actuación del fiscal general⁴.

En los días siguientes a su regreso, Chávez manifestó deseos de dialogar con los distintos actores sociales, políticos y económicos. Se establecieron mesas de diálogo, se nombró en común acuerdo con los gerentes de Pdvsa una nueva junta directiva, y se realizaron unos pocos cambios de gabinete que resultaron ser mucho menores a los esperados. El oficialismo se comprometió a desarmar a los CB; se convocó la conformación plural de una comisión de la verdad para esclarecer los hechos del 11 de abril y buscar a los responsables. También se constituyó una comisión política parlamentaria, que ya lleva un mes interpellando a todos los personajes que de una u otra forma estuvieron involucrados en los sucesos de abril –la mayoría de los interpellados han sido militares de alta graduación. Si bien estas interpellaciones han sido un

importante ejercicio democrático también constituyen un lente a través del cual puede observarse claramente la fractura y el malestar presentes en la FAN, dejando muy mal parado al Gobierno y a sus principales voceros, especialmente a José Vicente Rangel, recién designado vicepresidente, que para los sucesos de abril se desempeñaba como ministro de la Defensa.

Mientras el oficialismo desliza sus diagnósticos entre la conspiración y el golpe de Estado, la oposición y los militares involucrados en la restitución del presidente, defienden la interpretación del vacío de poder que se produjo ante la renuncia presidencial, divulgada a través de los medios de comunicación. El oficialismo no ha entendido que fueron los militares quienes aprovechando la coyuntura del 11 de abril detuvieron a Chávez –y quienes luego lo restituyeron.

¿Futuro incierto?

En su último *Aló Presidente* y para sorpresa de muchos, Chávez llamó al fortalecimiento de los CB y fustigó nuevamente a los medios de comunicación. Ello sentenció el fracaso de las mesas de diálogo y tal vez también anunció el inicio de

4. Fue convocada una marcha para el 23 de mayo cuyo destino final era la Fiscalía General de la República para solicitar la renuncia del fiscal.

una guerra civil, al proponer el fortalecimiento a estos círculos dejando claro que lo que se busca es fortalecer al «ejército popular» y debilitar a la FAN en la cual, evidentemente, no confía.

¿Existe entonces otra opción que no sea la confrontación definitiva? Quizá sí. Una nueva conformación de fuerzas en la Asamblea Nacional⁵ tiene un papel central. Esta podría inclinar la balanza hacia el lado de la oposición para frenar momentáneamente la confrontación, lograr mayoría para promover, dentro del marco constitucional, un referendo consultivo revocatorio, una enmienda constitucional a otro mecanismo institucional, que permita relajar las tensiones. La solicitud de apertura de juicios por malversación de fondos, la remoción de las autoridades del Poder Ciudadano y del Poder Electoral, podrían ser algunas iniciativas que además de necesarias, garantizarían una cierta objetividad a la vez que responderían a algunas de las demandas de la sociedad civil.

5. Antes de los sucesos de abril, la composición del bloque parlamentario oficialista había sufrido algunas fisuras a partir de la renovación de la directiva de la Asamblea Nacional, cuando algunos de los viejos aliados decidieron unirse al bloque de la oposición. Sin embargo, el Gobierno conservó la presidencia y la segunda vicepresidencia (representante de los indígenas), y en alianza con un sector del MAS, la primera vicepresidencia.

Una de las novedades que esta crisis ha traído es el creciente nivel de participación de las clases medias. Esta participación tiene una debilidad: carece de conducción política y pareciera apuntar hacia la anarquía en el sentido de ser eminentemente reactiva; no tiene proyecto porque aglutina, al igual que el chavismo, a sectores política e ideológicamente muy disímiles. Pero esa debilidad puede ser, paradójicamente, su fortaleza. Está poniendo de manifiesto que la conducción de una determinada acción de protesta o subversión del orden establecido, no necesariamente requiere de un liderazgo. Se reacciona en contra del exceso de liderazgo.

La sociedad venezolana tiene sobre sus espaldas una sentencia. Se ha decidido que la resistencia popular debe arreciar contra quienes pretendan socavar las bases del proyecto bolivariano. Si todo ello fuera una bravuconada más, no habría problema, pero no es Chávez quien ahora decidirá esto, porque ya no tiene el silbato para comenzar el partido y por lo tanto la confrontación puede comenzar en cualquier momento. No se sabe quién va a pitar el inicio de un desastre que el presidente sentenció el domingo 12 de mayo en su programa habitual.